

MAGNIFICA HUMANITAS: LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

SEBASTIÁN LÓPEZ

NET21 NÚMERO 33, JUNIO 202

La publicación de Magnifica Humanitas, primera encíclica de León XIV, sitúa la inteligencia artificial (IA) en el centro de una reflexión amplia sobre las transformaciones políticas, económicas, culturales y antropológicas de nuestro tiempo. El texto examina el impacto de la IA sobre el trabajo, la educación, la democracia, la comunicación y la gobernanza global, prestando especial atención a la concentración de poder tecnológico, así como a los riesgos de una automatización desvinculada de criterios éticos y de una innovación orientada exclusivamente por intereses económicos o geopolíticos. Frente a ello, León XIV defiende la necesidad de orientar el desarrollo tecnológico hacia el bien común, proteger la dignidad humana y garantizar que el progreso técnico permanezca subordinado a principios de justicia, prosperidad y responsabilidad colectiva.

La encíclica da continuidad a las preocupaciones que Francisco había formulado en los últimos años sobre la inteligencia artificial y los desafíos que plantea, lo cual quedó especialmente claro en su intervención el 14 de junio de 2024 ante la sesión del G7 dedicada a la inteligencia artificial, la cual definió como “un instrumento fascinante y tremendo al mismo tiempo”. León XIV retoma esa línea y la desarrolla en el contexto actual de aceleración tecnológica, concentración empresarial y competencia geopolítica creciente.

El texto aparece además en una fecha cargada de significado histórico: 135 años después de Rerum novarum, la encíclica con la que León XIII respondió a las transformaciones económicas y sociales de la revolución industrial. Entonces, el centro del debate era la cuestión obrera en una economía marcada por la industrialización, la urbanización y el conflicto entre capital y trabajo. Hoy, el escenario es distinto, pero persiste una pregunta similar: cómo gobernar una gran transformación tecnológica sin

que sus beneficios queden concentrados en pocos actores y sin que el progreso técnico termine ampliando desigualdades sociales y desequilibrios de poder.

La encíclica Magnifica Humanitas aborda cuestiones muy diversas, pero aquí me centraré en una de las líneas argumentales recogidas en su texto: la relación entre inteligencia artificial, concentración de poder y responsabilidad público-privada.

El punto de partida es la advertencia de que la inteligencia artificial no constituye únicamente una herramienta de innovación, productividad y prosperidad, sino también una infraestructura de poder económico y geopolítico. Quien controla los datos, la capacidad de cómputo, los modelos avanzados, los chips y el talento especializado dispone de una ventaja estructural sobre quienes dependen de tecnologías desarrolladas fuera de sus propias fronteras institucionales y productivas. La encíclica recoge así una idea central para comprender el debate contemporáneo sobre la IA: el desarrollo tecnológico es, sin duda, un motor de progreso económico y social, pero, al mismo tiempo, puede reforzar asimetrías ya existentes entre empresas, territorios y estados.

Precisamente por eso, el papel de las instituciones públicas tiene un gran protagonismo en la encíclica. Si la inteligencia artificial reorganiza poder económico y capacidad de decisión, la política no puede limitarse a intervenir después para compensar daños sociales una vez producidos. La pregunta ya no es si debe existir más Estado o más mercado, sino qué equilibrio público-privado permite que la innovación tecnológica amplíe capacidades colectivas en lugar de consolidar posiciones dominantes difíciles de corregir posteriormente.

A partir de ahí aparece un elemento que atraviesa la encíclica: la idea de corresponsabilidad. La gobernanza de la inteligencia artificial no puede recaer únicamente en gobiernos, grandes empresas tecnológicas o expertos técnicos. Requiere universidades, sistemas educativos, personas investigadoras, trabajadores, poder legislativo, medios de comunicación, organizaciones sociales y ciudadanía organizada. En otras palabras, la IA no será inclusiva, democrática o socialmente beneficiosa por simple evolución técnica. Dependerá de la capacidad de las sociedades para deliberar sobre

sus fines, construir instituciones capaces de limitar abusos y orientar el desarrollo tecnológico hacia objetivos compatibles con la dignidad humana, la justicia social y el interés colectivo.

El doble rostro de la IA

Desde sus primeras páginas, Magnífica Humanitas fija con bastante claridad el marco desde el que quiere abordar la cuestión tecnológica: “La tecnología puede curar, conectar, educar, cuidar la Casa común; pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias. [...] Por eso, la primera elección no es entre un ‘sí’ o un ‘no’ a la tecnología...”

Esa idea sirve como punto de partida para una reflexión sobre la desigualdad en la era de la inteligencia artificial. Por un lado, aparece la desigualdad social y económica derivada de una distribución profundamente asimétrica de los beneficios de la innovación. En este sentido, el texto advierte de que “la riqueza mundial ha crecido en términos absolutos, pero su concentración en pocas manos ha aumentado y los desequilibrios se han acentuado, tanto entre países como dentro de un mismo país”. Por lo tanto, la cuestión ya no es únicamente quién accede a la tecnología, sino quién participa realmente de los beneficios económicos, científicos y sociales que indudablemente produce.

Pero junto a esa dimensión distributiva aparece otra ligada al poder y a la soberanía tecnológica. Magnífica Humanitas describe un “colonialismo” que “ya no sólo domina los cuerpos, sino que se apropia de los datos”, convirtiendo información sanitaria, genética o demográfica en nuevas “tierras raras” estratégicas. En este contexto, la IA no aparece sólo como una herramienta tecnológica, sino también como una arquitectura de dependencia sustentada sobre capacidad de cómputo, chips, datos, energía, capital y talento altamente concentrados. Desde esta perspectiva, la desigualdad tecnológica ya no se mide únicamente en términos de renta, sino también en capacidad de decisión, ya que los países que no desarrollen infraestructuras, conocimiento y capacidades propias corren el riesgo de convertirse en consumidores de tecnologías diseñadas bajo prioridades fijadas por otros actores, utilizando incluso datos procedentes de sus propias sociedades. Esta dimensión geopolítica del desarrollo tecnológico ha quedado especialmente visible tras la reciente visita de Donald Trump a

China, celebrada entre el 13 y el 15 de mayo de 2026, donde uno de los ejes de la reunión fue el control de la industria taiwanesa de semiconductores avanzados. No en vano, la foundry Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) produce cerca el 70% de los chips de vanguardia del mundo (tecnología de 3 y 2 nanómetros), indispensables para el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación avanzada y buena parte de las tecnologías estratégicas presentes y futuras.

La propia opinión pública española parece estar de acuerdo con lo expresado por León XIV acerca del doble rostro del desarrollo tecnológico. La Encuesta de Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología 2024 de FECYT muestra que la ciudadanía española no es anticientífica ni tecnófoba. Al contrario: mantiene una valoración claramente positiva de la ciencia en los ámbitos donde sus beneficios son más tangibles. El 70,6% de los encuestados considera que la ciencia y la tecnología han aportado más beneficios que perjuicios a la hora de hacer frente a enfermedades y epidemias; el 54,8% piensa lo mismo respecto a la calidad de vida en la sociedad; y el 40,5% ve más beneficios que perjuicios en la conservación del medio ambiente y la naturaleza. Los tres primeros datos son importantes porque muestran confianza en la utilidad social de la ciencia cuando ésta se vincula a salud, bienestar y sostenibilidad.

Sin embargo, el tono cambia cuando la encuesta aborda cuestiones de carácter más social y distributivo. En relación con la creación de empleo, el 36,9% de las personas encuestadas considera que la ciencia y la tecnología han generado más beneficios que perjuicios, frente a un 23,3% que opina lo contrario, mientras que un 32,2% entiende que ambos efectos se encuentran equilibrados. Algo similar ocurre con el aumento de las libertades individuales: el 32,8% percibe un balance positivo, el 22,5% uno negativo y el 31,7% considera que beneficios y perjuicios se compensan. Estos resultados no reflejan un rechazo a la tecnología, pero sí una valoración más matizada. La ciudadanía reconoce su capacidad para mejorar la vida de las personas, aunque no da por sentado que toda innovación tecnológica produzca automáticamente más empleo, mayor libertad o mejores condiciones sociales.

La percepción se vuelve aún más crítica cuando se analiza la capacidad de la ciencia y la tecnología para reducir las diferencias entre países ricos y pobres. En este ámbito, solo el 25,1% considera que han generado más beneficios que perjuicios, mientras que el 36,8% sostiene la opinión contraria. Se trata de la única de las seis dimensiones evaluadas en la que predominan claramente las valoraciones negativas. El dato resulta especialmente significativo porque apunta a una preocupación social concreta: los avances tecnológicos pueden impulsar el progreso y, al mismo tiempo, distribuir de forma desigual sus beneficios.

Precisamente esta es una de las advertencias centrales de la encíclica, que invita a no identificar automáticamente desarrollo tecnológico y progreso humano, recordando que la innovación también puede convertirse en un factor de ampliación de las desigualdades si no va acompañada de criterios de justicia social y bien común. La cuestión no es pues estar a favor o en contra de la tecnología, sino decidir bajo qué reglas, con qué prioridades y al servicio de quién se despliega. Y precisamente ahí Magnifica Humanitas aporta mucha luz sobre la necesidad de instituciones públicas capaces de orientar la innovación hacia el bien común y de una acción colectiva suficientemente fuerte como para evitar que la revolución tecnológica termine ampliando las fracturas que promete resolver.

Innovar para el bien común

“En el pasado, eran principalmente los estados los que impulsaban y orientaban la innovación. Hoy, en cambio, los principales motores del desarrollo son actores privados, a menudo transnacionales, dotados de recursos y capacidad de acción superiores a los de muchos gobiernos. El poder tecnológico adquiere así un rostro inédito, predominantemente ‘privado’, y por ello aún más difícil de discernir, gobernar y orientar hacia el bien común”. La observación de Magnifica Humanitas captura una de las grandes transformaciones de nuestro tiempo, si bien conviene matizar la idea, a mi juicio incompleta, expuesta por León XIV acerca de quiénes son “los principales motores del desarrollo”. Aquí resulta especialmente útil el trabajo de Mariana Mazzucato, profesora de Economía de Innovación y Valor Público y directora del Instituto para Innovación y Propósito Público en la University College London, y una de las principales especialistas

contemporáneas en política industrial e I+D+i. En obras como El Estado emprendedor, Mazzucato ha cuestionado la idea de que el sector público se limita a corregir fallos de mercado mientras la verdadera innovación surge espontáneamente del sector privado. Su tesis central es radicalmente diferente: muchas de las tecnologías que hoy sostienen la economía digital —internet, GPS, microelectrónica— nacieron gracias a décadas de inversión pública, financiada por el Estado, y estrategias de largo plazo capaces de asumir riesgos que el capital privado rara vez acepta en fases tempranas de incertidumbre extrema.

Esto es especialmente evidente en el ámbito de las llamadas Deep Tech, o tecnologías profundas, entre las cuales se encuentra la inteligencia artificial, y que se caracterizan por ser intensivas en investigación, así como por necesitar de largos ciclos de maduración y de capital paciente. La innovación profunda no surge únicamente de la espontaneidad del mercado ni de un plan estatal cerrado; surge de la interacción sostenida entre conocimiento científico, política industrial y capacidad empresarial. La reciente Estrategia Deep Tech España 2026-2030 se sitúa acertadamente en este terreno. Su objetivo no es ni mucho menos sustituir a la empresa privada, sino fortalecer un ecosistema donde ciencia, industria, capital y sector público colaboren para transformar capacidad científica en liderazgo tecnológico e industrial. El propio documento insiste en la necesidad de combinar visión estratégica, inversión a largo plazo y cooperación público-privada para reducir incertidumbre y compartir riesgos en tecnologías especialmente complejas.

En este escenario, Magnifica Humanitas introduce una reflexión especialmente potente sobre justicia social y política económica. “No cabe duda de que se necesitan leyes justas e instrumentos de redistribución que corrijan los desequilibrios”, afirma el texto, pero añade inmediatamente una idea más profunda: la justicia no puede entenderse como algo separado y posterior a la creación de riqueza, “como si la economía debiera limitarse a crear valor y la política interviniera sólo después para distribuirlo”. Al contrario, “la justicia afecta a todas las fases de la actividad económica”, desde la financiación hasta la producción, desde el acceso al conocimiento hasta el reparto de oportunidades. Por eso la encíclica sostiene que “en la

era de la IA y de la robótica, ya no es posible confiar únicamente en la ‘mano invisible’ del mercado”.

En una línea muy cercana a la que plantea Magnífica Humanitas, si bien más centrada en aspectos laborales, se sitúa también la Orden Ejecutiva N-6-26 firmada por el gobernador de California, Gavin Newsom, el 21 de mayo de 2026. Lejos de asumir que el mercado orientará espontáneamente la inteligencia artificial hacia objetivos socialmente deseables, el propio texto reconoce que “debido a los incentivos de mercado que condicionan la toma de decisiones del sector privado, el desarrollo y despliegue de la IA para promover el bien público puede no ser priorizado o, en algunos casos, ni siquiera perseguido”, especialmente en un contexto marcado por la concentración de capacidad de cómputo en un reducido número de actores privados. Añade además que “el gobierno puede desempeñar un papel clave para garantizar el acceso a infraestructuras de IA para el bien común”. La coincidencia con la encíclica resulta evidente: la innovación no puede evaluarse únicamente por la riqueza que genera, sino también por la forma en que distribuye oportunidades, capacidades y poder. No es casual, por ello, que una parte de la respuesta propuesta por el gobernador de California descansa precisamente en la colaboración público-privada y en el papel de las instituciones académicas y que la orden encomiende a expertos universitarios y del sector privado la elaboración de propuestas para reorientar incentivos, promover asociaciones público-privadas y garantizar que los proyectos sirvan al bien común. La coincidencia con la encíclica es más que evidente.

A mi juicio, plantear esta cuestión en términos binarios constituye un error de partida. No se trata de elegir entre Estado o mercado, entre planificación pública o iniciativa privada. Las innovaciones que han transformado nuestras sociedades rara vez responden a esquemas tan simples. Más bien se sitúan en una amplia gama de grises, entendidos no como una solución de compromiso, sino como una expresión de flexibilidad y adaptación. Esa es, en gran medida, una de las enseñanzas fundamentales de la economía de la innovación y el conocimiento. La colaboración público-privada adopta formas distintas según la tecnología de que se trate, el momento histórico o las necesidades económicas y sociales existentes. Hay ámbitos en los que

el sector público debe asumir un papel más relevante porque la incertidumbre es elevada, los costes iniciales son considerables y los retornos se materializan a largo plazo. En otros, la capacidad empresarial, la competencia y la rapidez de ejecución resultan determinantes. Incluso una misma tecnología puede evolucionar a lo largo del tiempo y alterar ese equilibrio. Por ello, la cuestión no consiste en determinar quién debe imponerse en una supuesta disputa entre Estado y mercado, sino en comprender que las innovaciones con mayor impacto económico y social suelen surgir precisamente de la cooperación entre ambos.

Esta colaboración público-privada, necesariamente flexible y adaptativa, no puede reducirse a un modelo en el que se sustituya la iniciativa empresarial por una planificación centralizada, pero tampoco implica que el sector público asuma los riesgos mientras el sector privado concentra los beneficios. Su lógica es otra: combinar capacidades complementarias. Corresponde al Estado aportar visión estratégica, estabilidad regulatoria, financiación paciente e inversión sostenida en investigación y desarrollo; a las universidades y centros de investigación, generar y transferir conocimiento; a las empresas, transformar ese conocimiento en productos, servicios y soluciones escalables; y a la sociedad, a través de sus instituciones, garantizar que los beneficios de la innovación se distribuyan de manera amplia y contribuyan efectivamente al bien común.

Bajo esta perspectiva, podemos y debemos ser optimistas en cuanto al desarrollo tecnológico. La inteligencia artificial y otras tecnologías profundas pueden convertirse en enormes motores de prosperidad, salud, sostenibilidad y progreso. Pero para que eso ocurra, la innovación necesita dirección, instituciones sólidas y una cooperación entre sector público y sector privado con suficiente inteligencia humana como para hacer compatible competitividad tecnológica y bien común.

Un doble compromiso que interpela a la acción colectiva

Un aspecto muy importante dentro de la encíclica lo constituye la llamada que hace León XIV a la responsabilidad intelectual, científica y cultural que debe acompañar a esta revolución tecnológica. El texto habla de una “corresponsabilidad valiente” y recuerda que “a cada uno corresponde su tramo de muralla”, ya que la IA exige cooperación entre generaciones, entre

saberes y entre actores públicos y privados para orientarla hacia el bien común.

Dentro de esa llamada general a la colaboración, aparece una idea especialmente lúcida de la encíclica al reclamar “la urgencia de un doble compromiso: por una parte, una profundización de la investigación científica; por otra, un ejercicio de discernimiento moral y espiritual”. La formulación resulta particularmente acertada porque evita dos errores frecuentes en el debate contemporáneo sobre la inteligencia artificial. El primero consiste en pensar que bastan códigos éticos abstractos sin comprensión técnica real de los sistemas que se pretenden gobernar. El segundo consiste en asumir que el avance científico puede desarrollarse al margen de preguntas sobre sus fines, consecuencias y efectos sociales. Por el contrario, la encíclica sostiene, y en mi opinión, de manera muy acertada, que el desafío tecnológico exige simultáneamente más conocimiento y más juicio.

Para afrontar este doble compromiso, no existe una institución mejor situada que la universidad pública, un espacio donde se integran, de manera natural, especialización científica y reflexión humanística sin separarlas artificialmente. La universidad pública es, al mismo tiempo, espacio de investigación avanzada y lugar de formación crítica; institución científica y espacio de reflexión y debate. En el contexto de la inteligencia artificial, esa doble naturaleza adquiere una relevancia evidente. Si las tecnologías avanzan a una velocidad que dificulta incluso comprender plenamente su funcionamiento interno, las universidades tienen la responsabilidad de profundizar en el conocimiento técnico de estos sistemas, pero también de formar personas capaces de pensar sus implicaciones sociales, jurídicas, económicas y, sobre todo, humanas.

En este punto resulta especialmente relevante la reflexión de Martha Nussbaum, filósofa estadounidense y una de las voces más influyentes en la defensa contemporánea de las humanidades y la educación democrática. En *Sin fines de lucro*. Por qué la democracia necesita de las humanidades, Nussbaum advierte de una “crisis silenciosa” en las sociedades contemporáneas: sistemas educativos cada vez más orientados exclusivamente hacia la rentabilidad económica inmediata y cada vez

menos preocupados por formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, deliberar y comprender la situación de otros. Su argumento no es una defensa nostálgica de las humanidades frente a la ciencia o la tecnología, sino una constatación de que las sociedades tecnológicamente más avanzadas necesitan capacidades de razonamiento crítico, análisis moral y juicio independiente para evitar que el progreso científico quede subordinado únicamente a criterios de eficiencia o rentabilidad.

La advertencia resulta especialmente pertinente en la era de la inteligencia artificial. Una sociedad capaz de producir sistemas algorítmicos muy sofisticados pero incapaz de preguntarse quién queda fuera, quién concentra poder o qué consecuencias sociales generan determinadas tecnologías será también una sociedad democráticamente más frágil. Por eso Nussbaum insiste en que las artes, las humanidades y las ciencias sociales enseñan competencias fundamentales para la vida democrática: argumentar, cuestionar la autoridad, imaginar la perspectiva ajena y resistir la obediencia automática ante el poder o la costumbre. En un contexto crecientemente mediado por algoritmos, esas capacidades dejan de ser ornamentales para convertirse en condiciones básicas de ciudadanía.

Esta misma preocupación aparece también de manera clara en el documento de 2026 de UNESCO *Transforming higher education: Global collaboration on visioning and action*. Allí se reconoce que las universidades han desempeñado históricamente un papel central en el desarrollo tecnológico a la vez que se formula una idea muy cercana al “doble compromiso” de Magnifica Humanitas, al afirmar, con muchísima nitidez, que “la investigación universitaria desempeña un papel fundamental no sólo para comprender cómo evoluciona la tecnología, sino también para orientar esa evolución, incluyendo sus dimensiones éticas y ambientales y su contribución al bien común”. De nuevo, la coincidencia con la encíclica es abrumadora.

Leída desde una perspectiva civil y universitaria, Magnifica Humanitas no propone un rechazo de la inteligencia artificial ni una idealización ingenua del progreso tecnológico. Su aportación principal consiste más bien en recordar que toda gran transformación tecnológica trae progreso y

prosperidad, pero que, al mismo tiempo, reorganiza también relaciones de poder, formas de desigualdad y capacidades de decisión colectiva. Por eso, el título de la encíclica resulta especialmente significativo. La “magnífica humanidad” no aparece como una nostalgia frente al avance técnico, sino como la convicción de que el desarrollo científico sólo adquiere pleno sentido cuando amplía las capacidades humanas sin erosionar la dignidad, la libertad o la cohesión social. Desde esa misma perspectiva, la universidad pública no puede ni debe ocupar un lugar marginal en el debate sobre inteligencia artificial, sino uno central. No sólo porque forma talento o produce investigación, sino porque constituye uno de los pocos espacios capaces de combinar ciencia, pensamiento crítico y responsabilidad social. Y ahí la tradición humanista universitaria conserva una función insustituible. No porque deba oponerse a la tecnología, sino porque la academia, como actor fundamental en el desarrollo tecnológico basado en el conocimiento, puede ayudar a integrarlo críticamente en una idea más amplia de progreso: un progreso capaz de combinar innovación y justicia, conocimiento y responsabilidad, ciencia y bien común.

Consensos de largo plazo para una innovación al servicio del bien común

Hay, sin embargo, un elemento que Magnífica Humanitas no desarrolla de manera tan directa y que resulta imprescindible para que todo lo anterior pueda hacerse realidad. La inteligencia artificial y, en general, las tecnologías profundas no sólo requieren discernimiento moral, responsabilidad pública, cooperación público-privada y universidades y centros de investigación fuertes. Requieren también de grandes consensos políticos sostenidos en el tiempo.

La innovación tecnológica disruptiva no se desarrolla al ritmo de los ciclos electorales, pues las tecnologías profundas necesitan décadas de investigación acumulada, inversión paciente, infraestructuras científicas, regulación estable, formación de talento y una relación constante entre universidades, empresas, administraciones y sociedad. Ninguna de esas condiciones puede consolidarse si cada cambio político implica empezar de nuevo, modificar prioridades, abandonar estrategias o sustituir políticas de Estado por iniciativas coyunturales.

En este aspecto, la reflexión de Francisco ofrece una clave muy útil para completar la lectura de Magnifica Humanitas. En Laudato si' advertía contra el “drama del inmediatismo político” y recordaba que “la grandeza política se muestra cuando, en momentos difíciles, se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”. Más adelante añadía una afirmación que puede trasladarse casi literalmente al campo de la ciencia, la tecnología y la innovación: “Es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno”. Lo que Francisco aplicaba allí a la protección ambiental vale también para las grandes políticas industriales. Sin continuidad, no hay transición ecológica posible; pero tampoco hay política científica, industrial o tecnológica capaz de transformar realmente un país.

La misma idea reaparece en Fratelli tutti, donde Francisco reivindica una política capaz de pensar con visión amplia, incorporar el diálogo interdisciplinario y superar la lógica mezquina del corto plazo. En la encíclica vuelve a insistir en que la grandeza política se demuestra cuando se actúa “por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”, y añade una idea especialmente relevante: pensar en quienes vendrán “no sirve a los fines electorales”, pero es lo que exige una justicia auténtica. Esta formulación resulta central para cualquier debate serio sobre inteligencia artificial. Las decisiones que hoy se adopten sobre datos, algoritmos, soberanía tecnológica, educación, investigación, empleo o regulación no afectarán sólo a una legislatura, sino a la posición futura de sociedades enteras en la nueva economía del conocimiento.

Por eso resulta tan pertinente recuperar de nuevo la intervención de Francisco ante el G7, el 14 de junio de 2024, dedicada precisamente a la inteligencia artificial. En aquel discurso, después de advertir que la IA representa una revolución cognitiva e industrial capaz de transformar la vida social, la educación, el trabajo, la política y la propia comprensión de lo humano, Francisco situó el problema en el terreno de la política. Su conclusión fue muy clara: “Mi reflexión sobre los efectos de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad nos lleva así a la consideración de la

importancia de la ‘sana política’ para mirar con esperanza y confianza nuestro futuro”

Esa apelación a la sana política es decisiva. No se trata de eliminar la legítima discrepancia democrática ni de sustraer estos temas al debate público. Se trata de reconocer que hay ámbitos, como la innovación disruptiva que nace en los centros de conocimiento, en los que una sociedad necesita construir bases compartidas suficientemente sólidas para que las alternancias políticas no destruyan lo que requiere maduración prolongada. Un país puede aprobar una estrategia científica ambiciosa en una legislatura, pero si no la financia, evalúa, corrige y mantiene durante años, esa estrategia no llegará a transformar su tejido productivo. Puede anunciar una apuesta por la inteligencia artificial, pero si no invierte de manera sostenida en educación, universidades, infraestructuras digitales, capacidad de cómputo, empresas tecnológicas, transferencia de conocimiento y talento investigador, esa apuesta quedará reducida a retórica. Puede hablar de soberanía tecnológica, pero sin consensos estables acabará dependiendo de tecnologías, datos, estándares y plataformas definidos por otros. Puede impulsar innovaciones capaces de aumentar la productividad, crear nuevas industrias y generar, en términos agregados, más empleo del que destruyen, como explica Philippe Aghion, el Premio Nobel de Economía en 2025, a partir del concepto de destrucción creativa. Pero si no acompaña a quienes pierden su empleo durante la transición mediante formación, recualificación profesional, protección social e itinerarios efectivos de reinserción laboral, esa transformación terminará percibiéndose como una amenaza y no como una oportunidad compartida.

La cuestión, por tanto, no es sólo cuánta innovación queremos, sino qué tipo de innovación estamos dispuestos a sostener colectivamente. Una innovación orientada al bien común necesita instituciones capaces de mirar más allá del rédito inmediato, presupuestos plurianuales, evaluación rigurosa, cooperación entre niveles de gobierno, participación del sector privado, implicación de las universidades y una ciudadanía que comprenda que el conocimiento no es un gasto accesorio, sino una inversión estructural en libertad, prosperidad y cohesión social.

VET21